

BOLETIN Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales



número 132 - julio 2008

NUESTRA OPINIÓN

Pekín: el engaño de los Juegos "Carbolímpicos"

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Brasil: la deforestación de la Amazonía cobra nuevo vigor
- Guatemala: deforestación y desplazamientos por agrocombustibles
- Malasia: pueblos del bosque de Sarawak hostigados por madereros y represas
- Perú: paro nacional en defensa de los derechos colectivos indígenas
- Pérdida de manglares y cambio climático Una perspectiva mundial

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Brasil: decisión histórica de la Justicia Federal condena a Veracel Celulose (Stora Enso y Aracruz) por delito ambiental
- Chile: cineasta presa por documentar lucha Mapuche contra empresas forestales
- Colombia: la palma aceitera crece a fuerza de violencia
- Malasia: barricadas contra empresa de palma aceitera en Sarawak
- África Occidental: los ambiciosos planes de Wilmar y Olam International para la expansión del aceite de palma

JUSTICIA CLIMÁTICA YA!

• Grupos de la sociedad civil de Asia reclaman "Justicia Climática"

NUESTRA OPINIÓN

- Pekín: el engaño de los Juegos "Carbolímpicos"

Según Wan Gang, Ministro chino de Tecnología, los Juegos Olímpicos de Pekín tendrán como resultado la liberación de unos 1,18 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, "en parte por las grandes distancias que recorrerán tantos atletas y espectadores". Sin embargo, no debemos preocuparnos por esto porque las autoridades chinas aseguran que las Olimpíadas serán "básicamente" neutras en carbono.

Por supuesto, esto es imposible. Nadie puede ser "neutro en carbono" una vez consumido el combustible necesario para "recorrer largas distancias" (sobre todo en aviones, ómnibus y automóviles alimentados con combustibles fósiles). El carbono acumulado en ese combustible habrá sido liberado, aumentando así la cantidad neta de carbono en la atmósfera al sumarle el carbono que hasta entonces había permanecido almacenado en depósitos de petróleo subterráneos. En el caso de las Olimpíadas de Pekín, esto generará 1,18 millones de toneladas adicionales de carbono que contribuirán a aumentar el calentamiento global.

El problema es que mucha gente sinceramente cree en la posibilidad de ser "neutro en carbono", mayormente porque, como dice el refrán, "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad". Y esta mentira en particular es constantemente repetida por numerosos "expertos" que tienen mucho para ganar con el comercio de carbono y por algunas organizaciones supuestamente "verdes".

Tal es el caso del bien conocido WWF (que tiene un oso panda como logo), cuya sección china ha creado una página web especial para facilitar los pagos para poder ser "neutro en carbono". El sitio explica que "A través de su campaña Vé por el Oro ("Go for Gold"), el WWF llama también a los atletas olímpicos a comprometerse a realizar un viaje neutro en carbono a los Juegos de Pekín, donando el equivalente al costo de carbono de su vuelo para un proyecto "Gold Standard" de compensación del cambio climático." El WWF-China incluso recomienda cinco "puntos de venta" específicos: www.myclimate.org, www.atmosfair.de, www.atmos

La cita antes mencionada lleva a creer que pagando – "donando" – cierta suma de dinero, el carbono liberado por el avión, el ómnibus o el auto desaparecerá en algún lado por obra de alguien que hará algo que "compensará" tales emisiones. Parafraseando una película muy conocida, esto es de hecho una "Emisión Imposible".

Sin embargo, se hace creer a las personas que una serie de medidas, que pueden ser útiles en sí mismas pero que no tienen nada que ver con "neutralizar" las emisiones de carbono de los combustibles fósiles, les permitirán lograr la calidad de "neutros en carbono". Por ejemplo, no hay duda de que las medidas de ahorro de energía, la eficiencia energética, el uso de energía solar, eólica y geotérmica y la reducción del uso de automóviles, son todos pasos positivos en la dirección correcta. El problema surge – como en el caso de los Juegos Olímpicos de Pekín – cuando los organizadores afirman que estas medidas garantizarán que los Juegos sean "básicamente" neutros en carbono. No lo serán.

Lo que hace falta para enfrentar verdaderamente el problema del cambio climático es drásticamente reducir y finalmente eliminar el uso de combustibles fósiles. No es una cuestión de elección individual sobre ser "neutro en carbono", sino un asunto político que debe

ser tratado a ese nivel. No son los atletas olímpicos, que ya tendrán demasiados problemas para encontrar oxígeno suficiente en el aire contaminado de Pekín, quienes deban soportar la presión y cargar con la culpa, sino los gobiernos que continúan promoviendo un modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles y la destrucción del medio ambiente.

Los Juegos Olímpicos de Pekín podrán llegar a ser un éxito desde el punto de vista deportivo, pero no tendrán el "efecto positivo sobre el cambio climático" que el Ministro chino Wan afirma, y, ciertamente, no van a ser "básicamente" neutros en carbono. Intentar maquillar de verde 1,18 millones de toneladas de carbono puede resultar una tarea muy difícil.

inicio

COMUNIDADES Y BOSQUES

Brasil: la deforestación de la Amazonía cobra nuevo vigor

Este mes el parlamento brasileño dio carácter de ley a la medida provisoria Nº 422, que aumenta la superficie de la Amazonía que puede ser concedida para uso rural sin necesidad de licitación. El límite, estipulado anteriormente en 500 hectáreas, se amplía a 1.500 hectáreas, pudiendo deforestar hasta el 20 por ciento de la superficie concedida.

La votación contó con la fuerte oposición de la ex-ministra de Medio Ambiente y actual senadora Marina Silva, quien acusó al gobierno de legalizar la apropiación ilegal de las tierras de la Amazonía. "Esta medida significará un proceso de privatización de la tierra", declaró, anunciando que traería graves perjuicios al Plan de Combate a la Deforestación de la Amazonía.

Esta noticia se cruza con las revelaciones de un nuevo estudio estadounidense publicado en la revista "PNAS" y denunciado en un reportaje del periódico Folha e Sao Paulo del 1/7/2008. El estudio demuestra que entre 2000 y 2005, Brasil encabezó la lista en materia de superficie deforestada y velocidad de devastación, aún cuando en los últimos tres años había conseguido reducir en 59% los índices de deforestación (pasando de 27.429 km2 de agosto de 2003 a julio de 2004, a 11.224 km2 en la última medición, de agosto de 2006 a julio de 2007), algo que todo indica está a punto de revertirse.

Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 1.096 kilómetros cuadrados en mayo y más de la mitad de esa deforestación tuvo lugar en el estado de Mato Grosso do Sul (646 km2), donde históricamente se han denunciado las mayores presiones de las plantaciones de soja y de la ganadería sobre la selva.

Por otro lado, si bien la intensa expansión de la caña de azúcar para producción de etanol no ocupa tierras amazónicas, ejerce una presión indirecta en la medida que se ubica en zonas cercanas y las encarece, empujando otras siembras y la ganadería hacia la Amazonía y contribuyendo a su penetración con la construcción de carreteras e infraestructura.

La deforestación incide directamente, además, en el calentamiento global a través de la emisión de dióxido de carbono, y altera el proceso de evapotranspiración que regula el comportamiento climático.

Sin duda que, reiterando nuestra opinión al respecto, decimos que los bosques no están desapareciendo porque la gente y sus gobiernos sean ignorantes o porque no haya planes de gestión adecuados. Los bosques están desapareciendo porque una serie de políticas nacionales e internacionales interconectadas preparan el terreno para que ello suceda. Es por lo tanto a ese nivel que deben encontrarse las soluciones.

Artículo basado en información obtenida de: "Brasil é líder total em desmatamento, mostra novo estudo", Instituto Humanista Unisinos, Internet, 1-7-08, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/42192; "Deforestación amazónica superó los 1.000 km2", Diario El Universal C.A., http://www.eluniversal.com/2008/07/15/ten ava deforestacion-amazon 15A1799685.shtml

inicio

- Guatemala: deforestación y desplazamientos por agrocombustibles

En Guatemala, como en varios otros países del Sur, las comunidades indígenas y el ambiente pagan un alto costo por la expansión de los agrocombustibles. Deforestación, desplazamiento forzoso, amenazas, detenciones ilegales y hasta el asesinato signan este avance.

La organización Salva la Selva denuncia una situación que viene ocurriendo en los últimos tres años en un área conocida como "Finca Los Recuerdos", donde el Ingenio Guadalupe, una de las empresas productoras de etanol del país, ha estado deforestando en tierras indígenas para plantar caña de azúcar con destino a la producción del referido combustible.

En medio de una crisis alimentaria y del aumento de precios de los alimentos, el 30 de junio de este año, 60 familias Keqchi de La Isla, Caserío el Morador Semano, Corazón de Maíz y Teleman Punto 15, en Panzos, intentaron recuperar parte de su tierra para cultivarla y producir alimentos.

En respuesta, según consigna Salva la Selva, "fueron atacados por paramilitares asociados a la compañía. Durante este ataque, les dispararon desde un helicóptero, resultando herido un hombre de 35 años, padre de tres niños, quien tuvo que ser hospitalizado. Al día siguiente, las familias y representantes de la organización campesina CUC, realizaron una protesta pacífica durante la cual volvieron a ser atacados por los paramilitares, a quienes acompañaban dos representantes del Ingenio Guadalupe. Hubo disparos, amenazas de muerte, y dos mujeres resultaron detenidas de manera ilegal." En la zona de Coatepeque también ocurrieron ataques similares por la expansión de la palma de aceite para la producción de biodiesel.

De acuerdo a las informaciones facilitadas por el CUC, y por la organización internacional de derechos humanos Rights Action, esos eventos son representativos de lo que está pasando en toda Guatemala. Miembros del CUC denuncian lo siguiente: "Hacemos ver que el gobierno no tiene medidas claras para enfrentar la crisis alimentaria y de altos precios, y lo hacemos responsable de la reacción y acciones que tome la población ante el agravamiento de la crisis".

Hasta ahora las medidas que se han adoptado han ido en apoyo de los intereses de los grupos del agronegocio, para que éstos, tal como se denuncia, "obtengan de forma ilegal tierras que pertenecen a comunidades indígenas, y donde la violencia cometida por paramilitares e incluso por las fuerzas de seguridad del Estado se utiliza para desplazar a comunidades".

La destrucción ambiental y la violación de los derechos humanos es promovida por el sistema financiero mundial: en enero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una financiación que habilita al gobierno guatemalteco a desarrollar una estrategia nacional de agrocombustibles. Eso inevitablemente se traducirá en más deforestación, más apropiación de tierras, más desplazamientos forzosos, más violación de los derechos de las comunidades indígenas...

El BID es uno de los mayores financiadores de la expansión de los agrocombustibles en Latinoamérica y está preparando créditos privados por valor de \$3 billones. Rights Actions exhorta a realizar una acción ante el BID, denunciando la situación y reclamando la suspensión inmediata de todo apoyo y financiación a la producción de agrocombustibles en Guatemala mediante una carta que finaliza diciendo: "La producción de agrocombustibles en Guatemala ha incrementado la deforestación, la desertificación y acelera el cambio climático. También incrementa el hambre, y viola los derechos territoriales de las comunidades indígenas, incrementando la represión violenta. Por favor, suspenda inmediatamente su apoyo a los agrocombustibles en Guatemala." (accesible en http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283).

Artículo basado en información obtenida de: "Empresa de agrocombustibles reprime violentamente a indígenas en Guatemala", Salva la Selva, http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283

inicio

- Malasia: pueblos del bosque de Sarawak hostigados por madereros y represas

En el boletín del mes pasado del WRM recordábamos la lucha que por tanto tiempo libraron las comunidades locales en defensa de los bosques de Sarawak, particularmente mediante bloqueos en las rutas para detener la entrada de los camiones de las empresas

madereras a sus territorios.

Ahora, el pueblo Kenyah está peleando nuevamente en defensa de sus medios de vida. Según un informe del Instituto de Recursos de Borneo (BRIMAS), "Más de cien (100) indígenas Kenyah de varias aldeas comunitarias que viven en el interior de Telang Usan (Kedaya Telang Usan), en la región de Baram del Estado de Sarawak, Malasia Oriental, se reunieron en la cuenca superior del río Moh para llevar a cabo una protesta pacífica contra las operaciones madereras de la Samling Timber Company. El 19 de de mayo de 2008, los indígenas Kenyah de seis (6) aldeas comunitarias, a saber: Long Moh, Long Je'eh, Long Bela'ong, Long Sawan, Long Silat y Long Mekabar, comenzaron el bloqueo. Éste se estableció en las principales rutas madereras utilizadas por la empresa Samling Timber Company para sus actividades dentro de las tierras comunales y los bosques de los Kenyah en Kedaya Telang Usan, en la región de Baram".

El grupo Samling, uno de los gigantes madereros de Sarawak, certificado por el Consejo Malayo de Certificación Maderera (MTCC), no sólo taló ilegalmente sin previo consentimiento dentro de las tierras comunales indígenas sino que además, como dijo el Instituto de Recursos de Borneo, "ignoró los reclamos razonables de beneficios sociales y desarrollo para las comunidades, las cuales poseen derechos sobre el bosque y con total justicia deberían beneficiarse de los recursos forestales de la zona".

Los Kenyahs han protestado en reiteradas ocasiones ante las autoridades y la empresa forestal por los problemas causados por la destrucción del bosque, del que todavía dependen en gran medida para su existencia. Sin embargo, no se tomó ninguna medida y la compañía siguió adelante con sus actividades. Por eso decidieron recurrir a los bloqueos, con el fin de llamar la atención sobre su reclamo y detener los camiones de la empresa para que ésta no pueda extraer y transportar árboles valiosos del bosque de los Kenyah en la cuenca superior del Sungai Sebua, Sungai Jekitan y Sungai Moh. Sus pancartas decían: "Samling, no roben la riqueza de las tierras de los pobres para dársela a los ricos de la ciudad."

Según BRIMAS, el pasado 14 de junio la policía recibió la orden de acudir al sitio del bloqueo con una orden de detención emitida por la Corte Suprema de Miri. Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido noticias de que se haya efectivizado algún arresto.

Pero no parece haber tregua para los pueblos del bosque de Sarawak. Según Survival International, un documento secreto que se filtró revela los planes de la empresa Sarawak Energy Berhad para construir una serie de enormes represas hidroeléctricas en Sarawak, las cuales sumergirían los hogares de al menos mil indígenas Penan, Kelabit y Kenyah. Una de ellas dejaría también bajo aqua parte del Parque Nacional de Mulu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los proyectos energéticos serían construidos de aquí al 2020. La presentación de Sarawak Energy Berhad fue publicada, según parece por accidente, en una página web china, y ahora fue retirada. Sin embargo, aún se puede descargar, junto con un mapa del lugar propuesto para la represa, desde la página web de Survival: http://www.survival-international.org/news/3450.

Artículo basado en información extraída y adaptada de: "Malaysian police ordered to clear Kenyah logging road blockade", Bruno Manser Fonds, http://www.bmf.ch/ch/news/?show=102 y "Secret plans revealed to submerge Penan villages", 17 de julio de 2008, Survival International, http://www.survival-international.org/news/3450

inicio

- Perú: paro nacional en defensa de los derechos colectivos indígenas

El 8, 9 y 10 de julio pasados, la Confederación Campesina de Perú y la Confederación Nacional Agraria, con la nutrida adhesión de numerosas organizaciones indígenas y campesinas, llevaron adelante una amplia protesta en todo el país, coincidiendo el día 9 con un paro general nacional convocado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).

La protesta reunió a varias Comunidades, Federaciones y Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Amazonía y varias consignas, en especial el reclamo del respeto de los Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, afectados por las políticas que el gobierno intenta imponer en la Amazonía y que suponen la imposición de industrias destructivas de la Amazonía y sus habitantes, como la minería, la explotación petrolera y la forestación.

Algunos de los reclamos de los Pueblos Indígenas en el Perú se refieren a una serie de proyectos de leyes que cercenan los derechos colectivos indígenas, entre ellas una serie de iniciativas legislativas:

- * los decretos legislativos 1015 y 994, por el cual el Poder Ejecutivo intenta imponer coactivamente la parcelación y propiedad individual en tierras indígenas comunitarias en todo el Perú. Esto provocaría su desprotección y permitiría la invasión de poderosos grupos económicos, principalmente de las industrias extractivas. Las normas propuestas también violan varios artículos de la Constitución, que garantizan la propiedad comunal y establecen que las comunidades son autónomas en su organización;
- * el proyecto de ley 840, llamado "Ley de la Selva" (ver Boletín del WRM Nº 129), con el que se pretende privatizar miles de hectáreas de bosques amazónicos para una supuesta "reforestación", con el argumento de que son zonas sin cubierta boscosa y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas, siendo que en la selva no hay territorios eriazos, como denuncian las organizaciones indígenas;
- * el proyecto de ley 2133, que faculta la venta de las playas, barrizales y restingas que dejan los ríos de la Amazonía.

Al decir del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas – FREDESAA, se trata de leyes con las que se deja sin tierras al habitante amazónico, convirtiéndoles de sus legítimos dueños en peones o posteriormente en esclavos.

La medida de paro general del 9 de julio, que paralizó a buena parte del país logrando los mayores grados de acatamiento en los Andes sureños, en el centro y en la Amazonía, sumó a las referidas consignas la protesta por la política neoliberal del gobierno, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la privatización de los puertos y servicios básicos como el aqua.

En numerosas ciudades la gente salió a las calles a manifestar y se cortaron carreteras. El gobierno movilizó a cien mil policías en todo el país y sacó a las fuerzas armadas para que asumieran el control de instalaciones estratégicas, como las estaciones de energía eléctrica, los depósitos de agua potable y los aeropuertos. El saldo fue unas 200 personas detenidas.

Artículo basado en información obtenida de: "Unidad de los Pueblos ante Paro en la Amazonía del Perú", Red Ucayali, 9/07/2008, http://peru.indymedia.org/news/2008/07/40434.php; "El paro pegó fuerte en Perú", Carlos Noriega, Página 12, 10/07/2008, reproducido por bilaterals.org/article.php3?id_article=12653; "En defensa de las tierras de la Amazonía", FREDESAA, 6/06/2008, http://frentes-regionales.blogspot.com/2008/06/fredesaa-frente-de-defensa-y-desarrollo.html

inicio

- Pérdida de manglares y cambio climático - Una perspectiva mundial

Los manglares son las selvas tropicales del mar. Grandes franjas de la costa tropical y subtropical de Asia, África, Oceanía, las Américas y el Caribe están bordeadas por manglares que alguna vez se estimó que cubrían una superficie de más de 32 millones de hectáreas. Ahora quedan menos de 15 millones de hectáreas (menos de la mitad de la superficie original).

Nunca se insistirá lo bastante sobre la importancia de la zona de amortiguación protectora que proveen los manglares. En regiones donde los bosques de la franja costera fueron eliminados, surgieron tremendos problemas de erosión y encenagamiento y hubo terribles pérdidas de propiedades y vidas humanas debido a los huracanes, las marejadas de tormenta y los tsunamis.

Hoy en día es cada vez más urgente reconocer la importancia de conservar y restaurar el cinturón verde protector que constituyen los manglares para disminuir los riesgos de futuras catástrofes porque, así como aumenta el nivel del mar, lo harán la frecuencia y la intensidad de los huracanes y las marejadas. La presencia de manglares lozanos puede amortiguar la furia de esas tormentas destructoras, formando una barrera que proteja los poblados ubicados detrás de ellos.

La organización Mangrove Action Project (MAP) está trabajando con otras organizaciones del Sur en la tarea, que consideran altamente prioritaria, de restaurar las zonas de manglares degradados o eliminados. MAP quiere sobre todo restaurar parte de las

250.000 ha de granjas camaroneras abandonadas, ubicadas en lo que antes eran pantanos costeros, especialmente en Asia y América Latina. Pero, lo que es aún más importante, la organización se esfuerza por ayudar a conservar y proteger los manglares que aún existen en el mundo.

La conservación de los manglares existentes y la restauración de las vastas zonas de humedales ya degradadas y devastadas contribuirán a resolver en parte el problema del calentamiento global. Nuestro planeta enfrenta tal vez una de las mayores amenazas a la vida tal como la conocemos. El cambio climático inducido por los seres humanos está en la raíz de esta crisis. Como casi la mitad de la humanidad vive hoy en ciudades y poblados ubicados a lo largo de las ahora vulnerables costas, el calentamiento global y la consiguiente elevación del nivel del mar no pueden ser ignorados. En el Pacífico Sur y el Sur de Asia ya han comenzado las evacuaciones de islas bajas. Se esperan evacuaciones masivas de millones de residentes costeros para los próximos 50 años si el nivel del mar continúa aumentando como resultado del efecto invernadero causado por las emisiones excesivas de gases carbónicos.

Sin embargo, los manglares son a menudo la primera línea de defensa que protege la costa contra la erosión y las tormentas. Los manglares son también unas de las mejores herramientas de la naturaleza para combatir el calentamiento global gracias a su gran capacidad para secuestrar carbono. Es ésta una característica de los pantanos de manglares que requiere ahora nuestra más inmediata y total atención. Una de las mayores contribuciones que los manglares pueden ofrecer es su gran capacidad para secuestrar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en el sustrato del humedal. Según el número de febrero de 2007 de National Geographic, "Los manglares son fábricas de carbono...Las mediciones sugieren que los manglares podrían tener la mayor productividad neta de carbono de todos los ecosistemas naturales (aproximadamente 40 kgs por cada media hectárea y por día)..."

Los manglares han sido seriamente subestimados por las agencias gubernamentales responsables de su protección y manejo. Esto resulta evidente en el Caribe, sobre todo en las Bahamas, donde se están tomando medidas que son una parodia por su falta de visión, como sucede en Guana Cay y las islas Bimini.

La combinación de falta de ética ambiental, de codicia miope y de débil aplicación de las leyes ha causado la desaparición masiva de estos humedales costeros y ha tenido un altísimo precio oculto: la oxidación y la liberación del carbono almacenado en los manglares.

Gracias a un estudio realizado por el Dr. Ong de la Universidad Sams de Malasia, se descubrió que las capas de tierra y turba que componen el sustrato del manglar tienen un alto contenido de carbono, de 10% o más. Cada hectárea de sedimentos del manglar puede contener cerca de 700 toneladas de carbono por metro de profundidad. Al construir grandes cantidades de granjas camaroneras o complejos turísticos, la tala resultante de los manglares y la subsiguiente excavación del sustrato tendrían el potencial de provocar la oxidación de 1.400 toneladas de carbono por hectárea y por año.

También según el Dr. Ong, "Suponiendo que sólo la mitad del carbono se oxidara durante un período de 10 años, estaríamos frente a un retorno a la atmósfera de 70 toneladas de carbono por hectárea, por año, durante 10 años. Esto equivale a unas 50 veces el nivel de secuestro. Significa que bastaría con destruir apenas el dos por ciento de los manglares para que se perdieran todas las ventajas que estos tienen como sumideros de carbono atmosférico..."

Según el último estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el índice actual de pérdida de manglares es de alrededor del 1% anual, lo cual significa que cada año desaparecen unas 150.000 hectáreas de manglares. Esto se traduce, cada año, en la pérdida de la capacidad de secuestro de unas 225.000 toneladas de carbono y la liberación adicional de aproximadamente 11 millones de toneladas de carbono provenientes del suelo de los manglares afectados.

Obviamente, se trata de un enorme problema que requiere nuestra acción coordinada. No sólo estamos perdiendo el importante potencial de secuestro de carbono que ofrecen los manglares, sino que además estamos viendo la liberación de mayores cantidades de gases contaminantes del propio sustrato afectado. El continuo desmonte de manglares, por la razón que sea, debe ser considerado bajo una luz totalmente nueva... una luz que ilumine mucho más allá de las sombrías grietas del desarrollo por conveniencia e interés, hacia un futuro para la vida y una vida sostenible en este planeta que hoy está en peligro... este hogar nuestro que llamamos Tierra.

Por Alfredo Quarto, Director Ejecutivo, Mangrove Action Project, www.mangroveactionproject.org

REFERENCIAS: Ong, Jim Eong, Prof., Centro de Estudios Marinos y Costeros, Universidad de Sams, Malasia, The Hidden Cost of Mangrove Services, Use of Mangroves for Shrimp Aquaculture, Intl. Science Roundtable for the Media, 2002

111	`I
ш	JL
	ıi(

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Brasil: decisión histórica de la Justicia Federal condena a Veracel Celulose (Stora Enso y Aracruz) por delito ambiental

El 17 de junio de 2008, la Justicia Federal de la ciudad de Eunápolis, Estado de Bahia, divulgó en el Diario de la Justicia Federal de Bahia (Nº 42/pág. 60), la sentencia de una Acción Civil Pública, promovida por el Ministerio Público Federal en 1993 contra Veracel Celulose –denominada en ese momento Veracruz Florestal- y los órganos ambientales del estado (CRA – Centro de Recursos Ambientales) y federal (IBAMA – Instituto Brasileño de Medio Ambiente).

La Justicia Federal brasileña condenó a Veracel a restaurar, con vegetación nativa, todas sus áreas comprendidas en las licencias de plantación de eucaliptos que fueron emitidas entre 1993 y 1996. Esto significa que un área de 96 mil hectáreas, cubierta por plantaciones de eucalipto de la empresa, deberá ser reforestada con árboles de la Mata Atlántica, uno de los biomas más diversos del planeta y al mismo tiempo más amenazados del mundo. La empresa también fue condenada a pagar una multa de R\$ 20 millones (USD 12,5 millones) por la deforestación de la Mata Atlántica, con tractores y máquinas unidas con cadenas, ocurrida en los primeros años de su funcionamiento (1991-1993). Veracel anunció que apelará la decisión.

Veracel Celulose es una *joint venture* de dos de las mayores empresas del ramo del papel y la celulosa en el mundo: la suecofinlandesa Stora-Enso y Aracruz Celulose, cada una titular del 50% de las acciones. Veracel posee aproximadamente 205 mil hectáreas de tierras en el Extremo Sur de Bahia, siendo cerca de 96 mil hectáreas de monocultivo de eucalipto; su fábrica de celulosa tiene una producción de aproximadamente 900 mil toneladas, destinadas a la exportación, perteneciendo la mitad de esa producción a Aracruz y el resto a Veracel.

Esta decisión de la justicia brasileña puede ser clasificada como histórica por diversos motivos:

- La decisión hace justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental del Extremo Sur de Bahia y de la Red Alerta contra el Desierto Verde, que luchan desde hace 15 años para que Veracel Celulose sea condenada por su participación en la destrucción de la Mata Atlántica en la región, comprobada por un video divulgado por Greenpeace. El video llevó al entonces Ministro de Medio Ambiente, Fernando Coutinho Jorge, a impedir el emprendimiento, a pesar de las tentativas de la empresa de negar y camuflar los estragos ambientales cometidos. Al mismo tiempo, se trata de una decisión inédita en el Brasil, en el sentido de penalizar un delito ambiental cometido por una gran empresa plantadora de eucaliptos, recordando que otras empresas también han cometido el mismo delito pero nunca fueron condenadas.
- La decisión hace justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental y de la Red Alerta, que siempre alegaron que empresas como Veracel fueron autorizadas ilegalmente, sin seguir las reglas y criterios para la elaboración de estudios e informe de impacto ambiental (EIA/IIA). En 1994, tres años luego de haber iniciado la plantación de eucaliptos, la empresa encomendó, siendo obligada por el Ministro de Medio Ambiente, una EIA/IIA para las plantaciones y la construcción de la fábrica de celulosa. Los documentos fueron elaborados rápidamente por la empresa finlandesa Jaakko Poyry (actual Poyry), empresa que se benefició posteriormente con el emprendimiento, con servicios de consultoría prestados a la empresa. En ese momento, la EIA/IIA sufrió severas críticas de auditores contratados por el CRA y ONGs. A pesar de ello, el CRA concedió las licencias necesarias para que la empresa continuara la expansión de sus plantaciones y la implantación de la fábrica.
- Con esta decisión, por primera vez se dice basta al poder político-financiero de empresas como Veracel y de sus dueños, Aracruz y Stora-Enso. Estas empresas se apropian del territorio si tener límites, financian campañas de políticos

para todos los cargos e influencian al poder público para obtener reglas, incentivos y financiamientos para facilitar sus inversiones; y contratan los mejores estudios jurídicos del país para anular posibles perjuicios de acciones en el área ambiental, social y laboral.

Cabe recordar que no es la primera vez que Veracel recibe una multa o es cuestionada por los órganos competentes por cometer ilegalidades:

- En marzo de 2007, la empresa fue multada por el organismo federal ambiental, el IBAMA, en R\$ 400.000 (USD 250.000) por hacer uso ilegal de una sustancia tóxica (herbicida Roundup) en 31,6 hectáreas de un área de preservación permanente.
- En diciembre de 2007, Veracel fue multada en R\$ 360.900 (USD 225.563) por el IBAMA por impedir la regeneración natural de Mata Atlántica con proyectos de plantación de eucalipto en 1.203 hectáreas de este bioma.
- La empresa tiene 7.428 hectáreas de plantaciones alrededor de los Parques Nacionales de Monte Pascoal y Pau Brasil, no respetando una recomendación explícita del Ministerio Público Federal de Bahia de que las empresas no planten más eucaliptos en un radio de 10 km en el entorno de los Parques Nacionales en la región, de conformidad con reglamentaciones federales.

Lo que más impresiona es que, a pesar de todos esos hechos, Veracel Celulose obtuvo de SGS/Qualifor en marzo de este año el certificado FSC de *buen manejo forestal ambientalmente adecuado* para sus plantaciones de monocultivo de eucalipto. El certificado fue emitido a pesar de severas críticas de la sociedad local e internacional, expresadas en una carta firmada por 347 entidades en agosto de 2007. Ni siquiera una auditoría realizada por el FSC (ASI) en marzo de este año recomendó la suspensión del sello, a pesar de haber indicado diversos motivos por los cuales el certificado FSC no podría haber sido concedido.

Ciertamente, a la empresa le interesa tener la legitimidad del sello FSC por el hecho de estar en pleno proceso de duplicar sus plantaciones y de construir una nueva fábrica. El informe anual de 2007 de uno de los dos accionistas, Aracruz Celulose, publicado en el Diario "A Gazeta" el 16/01/2008, afirma que "Antes de fines de 2008, aproximadamente el 70% de la base forestal necesaria para la duplicación de Veracel deberá estar adquirida. La nueva línea tendrá una capacidad de 1,4 millones de toneladas anuales de celulosa, lo que elevará la capacidad nominal de producción de la unidad a 2,3 millones de toneladas (50% para cada uno de los socios, Aracruz y Stora-Enso)".

Y asimismo, en su sitio en Internet Aracruz afirmó que "USD 65 millones ya habían sido invertidos en la adquisición de 35 mil hectáreas de tierras y bosques."

(http://www.aracruz.com.br/show_press.do?act=news&id=1000557&lang=1)

Esta expansión significa la continuidad de los impactos negativos sobre el medio ambiente, siempre relatados por las comunidades locales vecinas a las empresas de monocultivos de árboles. Es extremadamente preocupante cuando el FSC en su informe de auditoría afirma que "la empresa no cuenta con procedimientos apropiados para monitorear impactos sobre el agua y ambientales, antes, durante y después de operaciones forestales, (..)". De por sí, éste ya es un motivo para no certificar a la empresa.

Sobre el proceso de duplicación de las plantaciones y de la fábrica, anunciada en el informe oficial por Aracruz, la propia Veracel sorprende: "Al final de la auditoría ASI, el Sr. Alípio (Director-Presidente de Veracel) afirmó a los equipos de auditoría de ASI y SGS que no se había tomado ninguna decisión con relación a la expansión de las actividades de Veracel. Indicó que en el momento los accionistas solamente habían dado luz verde para iniciar un estudio de viabilidad e impactos para dicho proyecto." (FSC Surveillance of SGS Qualifor in 2008, Forest Management Audit to VERACEL, Brazil, 26-28/03/2008)

¿Quiere decir que las afirmaciones de Aracruz, citadas anteriormente son falsas? ¿O el presidente de Veracel está mintiendo?

Estas contradicciones explícitas, además de los demás aspectos indicados, deberían ser motivo suficiente para que el FSC suspenda inmediatamente la certificación concedida.

Al mismo tiempo, resulta necesario que la sociedad civil brasileña e internacional se movilice para garantizar la conquista de la

decisión histórica de la Justicia Federal brasileña, tan significativa para tod@s l@s que se oponen a las acciones de estas empresas y tan importante en este momento de expansión desenfrenada de la empresa Veracel y de sus dueños, Aracruz y Stora-Enso, incrementando cada vez más los impactos negativos de este tipo de emprendimientos sobre las comunidades locales y el medio ambiente.

Es en ese sentido que el Foro Socio-Ambiental del Extremo Sur de Bahia elaboró una moción de apoyo al Ministerio Público Federal de Bahia, felicitando a este órgano público brasileño, así como a la Justicia Federal de Bahia, por la decisión tomada. El Foro Socio-Ambiental invita a tod@s para que firmen la moción, que se encuentra disponible en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/ mocion_apoyo.html

inicio

- Chile: cineasta presa por documentar lucha Mapuche contra empresas forestales

La ocupación de los territorios ancestrales Mapuches por latifundios de plantaciones de eucaliptos y pinos de grandes empresas forestales como CMPC y Forestal Bosques ARAUCO (Holding COPEC) cuenta para su expansión con el apoyo del aparato del Estado. La represión, la tortura, la muerte, y la criminalización de la resistencia Mapuche constituyen el marco del "modelo forestal".

El conflicto Mapuche es como una lepra en la sociedad chilena, ocultado, estigmatizado, negado.

La documentalista y profesora de música Elena Varela se había interesado en la música Mapuche y fue a realizar un trabajo académico de investigación a la IX Región, para interiorizarse de su música y sus instrumentos. Pero la situación con la que se encontró cambió la óptica de su trabajo.

Según sus propias declaraciones, "Vi que están empobrecidos, que sus tierras están secas, que detrás de las forestales hay todo un aparataje político, político-militar, y vi que la industria forestal se gasta toda la plata que sea necesaria para acallar a cualquier persona que se rebele contra el sistema. Los allanamientos a las comunidades mapuches son constantes y terribles. Yo creo que algunos todavía buscan entre los mapuches a ese terrorista que imaginó Pinochet, un terrorista que nunca van a encontrar en la zona mapuche, porque no existe".

Elena Varela se dedica, entonces, a rodar un documental al que llama "Newen Mapuche" (La fuerza de la gente de la Tierra), por el cual busca registrar el conflicto que enfrenta a las comunidades Mapuches con la industria forestal por reivindicaciones territoriales históricas, en defensa de sus derechos colectivos y por la protección de su ambiente frente a la depredación de los monocultivos forestales (ver Boletines Nº 120, 106, 101 del WRM)

En los últimos años, en el marco del deterioro social, cultural y ambiental provocado por la expansión territorial de las industrias forestales, las legítimas protestas sociales del Pueblo Mapuche, principal afectado, tienen como respuesta una violenta represión contra los Mapuches y quienes abordan solidariamente esta problemática.

La criminalización extiende su largo brazo. Desde el asesinato por la espalda del joven Matías Catrileo hasta el encarcelamiento, sólo en el periodo de Bachelet, de más de 55 Mapuches acusados de atentar contra plantaciones forestales, en algunos casos con condenas de hasta 10 años (ver Boletín Nº 26), pasando por decenas de heridos en manifestaciones, situaciones de amedrentamiento y terror.

El pasado 7 de mayo, mientras realizaba su película, Elena Varela fue detenida por más de 20 policías armados. Según sus propias declaraciones en una entrevista realizada por el periodista Jaime Díaz Lavanchy, Varela contó que "No me dejaron hablar con un abogado en 24 horas, no me dijeron de qué se me acusaba", y fue bastante después que se enteró que la acusaban de "asociación ilícita para delinquir".

Ella alega su inocencia y afirma que está en la cárcel por su película: "Estoy presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información que manejo, por interactuar con activistas Mapuches que luchan por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades Mapuches que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada, porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El pueblo Mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto tanta gente aplastada emocionalmente, siquiátricamente, tanta gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa".

Lo que más me duele, dice Elena, son los niños, "¡los niños enfermos de Temucuicui! [comunidad Mapuche de la zona de Ercilla sometida a constantes allanamientos de las Fuerzas Especiales de Carabineros] Se ve en sus dibujos. En sus dibujos ellos pintan militares dentro de sus casas, explosiones de bombas lacrimógenas. ¡Eso es lo que no quieren que se sepa! Y quieren saber, además, dónde están los Mapuches que están luchando, para exterminarlos, como quieren hacer conmigo. Yo quise hacer una película y me encarcelaron. Esta es una manera de exterminarme, de silenciarme".

Amnistía Internacional declara oficialmente que cree que "las autoridades la han detenido en un intento de frenar las investigaciones sobre este conflicto y de intimidar tanto a ella como al pueblo indígena Mapuche. La policía confiscó en su casa artículos como cintas de vídeo, equipo de sonido, cámaras fotográficas y teléfonos móviles, así como vestuario que se necesita para filmar el documental. Además, se llevó los materiales de la investigación que Elena Varela había realizado y documentos relacionados con la financiación de la película por parte del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Amnistía Internacional teme que esta información pueda ser utilizada por las fuerzas de seguridad chilenas para intimidar y acosar a activistas Mapuches y a quienes contribuyen con su opinión a la investigación".

La situación que vive la documentalista Elena Varela no es única. Desde marzo de 2008, las autoridades han detenido a tres realizadores de documentales que han denunciado el conflicto entre las empresas madereras y el pueblo Mapuche. El informativo Mapuche Mapuexpress da cuenta de que: "Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén [autoridad tradicional del pueblo Mapuche]. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Dos días (después) fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario loseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización Mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko".

Amnistía Internacional recomienda una serie de acciones por el caso de Elena Varela, entre ellas enviar una carta a la Presidenta, la Ministra de Cultura y el Ministro del Interior (ver en http://www.amnistia.cl/index_aauu.shtml?x=87763). Por su parte, varias personalidades del mundo cinematográfico han circulado una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando la libertad de Elena Varela y manifestando su "preocupación por la situación de la libertad de expresión en Chile" (ver http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/medidas_cautelares.pdf y video de conferencia de prensa http://www.youtube.com/watch? v=GaS9Fcoz3LA).

Para Elena Varela, el dolor es muy grande "por no poder mostrar lo que tenía para mostrar. Pero tengo que ser fuerte, porque el dolor de los Mapuches lo estoy sufriendo ahora yo, en carne propia".

Artículo basado en información obtenida de: "Estoy presa por la información que manejo", Jaime Díaz Lavanchy / La Nación Domingo, 9 de junio de 2008, http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080628/pags/20080628180307.html; "Chile: Libertad de Expresión", Amnistía Internacional, http://www.amnistia.cl/index_aauu.shtml?x=87763; "Documentalista de Film Mapuche y las graves violaciones al trabajo documental", Mapuexpress, http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2870; aportes de Alfredo Seguel, Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche, alfredoseguel@gmail.com

inicio

- Colombia: la palma aceitera crece a fuerza de violencia

Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones de palma en Colombia han coincidido

geográficamente con áreas de expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto que algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos productivos para los mismos desmovilizados del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes incursionaron en esas mismas zonas.

Esta estrategia de control territorial mediante la expansión palmera tiene un aliado importante en las políticas gubernamentales de apoyo e incentivación a la siembra de palma aceitera que también buscan claramente el control económico, político y militar de grandes áreas de Colombia que escapan al control estatal.

Las políticas estatales están a su vez potenciadas por los lineamientos estratégicos de la inversión de los organismos internacionales. Un análisis de las propuestas inversoras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son ilustradoras al respecto: "A criterio del BID, los cultivos de mediano y largo plazo tienen mayor potencial exportador, mayor capacidad de supervivencia en una economía abierta, imprimen grandes beneficios en términos del proceso de pacificación y generan un crecimiento sostenido del agro, superando de esta manera los problemas de financiamiento agropecuario de largo plazo. (...) Y en concordancia con el Documento de País (BID), el programa focaliza sus actividades en las zonas y proyectos importantes desde el punto de vista del esfuerzo de pacificación. En general las inversiones en cultivos de mediano y largo plazo son vistas por el BID como estrategias de gobernabilidad o control territorial frente a problemáticas como el conflicto guerrillero, la violencia política, la delincuencia común y los cultivos ilícitos. La agricultura extensiva es una alternativa real para la ocupación del territorio y para la generación de empleo en áreas de conflicto."

Finalmente, todos estos discursos confluyen en la idea de que los cultivos de palma son un medio de desarrollo económico útil para la pacificación del país. Esta confluencia de actuaciones ilegales y delictivas, de políticas gubernamentales y de inversiones internacionales conforma el modelo palmero colombiano.

Este modelo se puede generalizar en un esquema de 5 fases:

- 1. Arremetida o conquista paramilitar.
- 2. Apropiación ilegal de las tierras. Robo o compra con intimidación armada.
- 3. Sembrado de palma.
- 4. Complejo palmero = Plantaciones + Extractoras.
- 5a. Flujo del aceite hacia el mercado nacional y/o internacional.
- 5b. Dominio territorial.

Esta caracterización es una síntesis de los diferentes procesos que se vienen desarrollando en las zonas palmeras del país, pero es particularmente aplicable en su totalidad (de 1 a 5) a las nuevas plantaciones desarrolladas desde principios de la presente década.

En procesos anteriores como en Santander o Tumaco, el modelo se ha iniciado con complejos palmeros ya establecidos, siendo los empresarios palmeros los que conformaron o invitaron y financiaron a grupos paramilitares como cuerpos de seguridad privada frente a la guerrilla. En cambio en Casanare, las plantaciones de palma se expandieron al mismo ritmo que el accionar paramilitar, solapándose ambas expansiones. El caso que se ajusta perfectamente al modelo corresponde a las plantaciones del Chocó donde fueron los propios paramilitares los que invitaron a los empresarios palmeros a instalarse en sus zonas de control.

Según la Procuraduría General de la Nación, "la apropiación, usurpación y saqueo de las tierras por parte de grupos de autodefensas (33%), guerrillas (17%), narcotraficantes, esmeralderos [comerciantes de esmeraldas], terratenientes, algunos palmicultores y otros actores se ha denominado por analistas y medios de comunicación como la 'contrareforma agraria' y la 'parareforma agraria'".

En el estimado de entre 2,6 y 6,8 millones de has., hay muchas que actualmente están plantadas con palma. Esta 'contrarreforma agraria' denunciada por distintos analistas y medios de comunicación lleva siendo denunciada desde hace mucho tiempo por las propias víctimas, como en el caso de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó afectadas por las plantaciones de palma.

Las incursiones, arremetidas o la posterior conquista territorial han dejado un saldo macabro en las áreas rurales de Colombia. Los asesinatos o masacres, las desapariciones forzadas, las amenazas, los secuestros, las torturas y demás hostigamientos provocan el desplazamiento forzoso colectivo y/o individual de los habitantes de las tierras que se pretenden arrebatar.

Las dimensiones del desplazamiento forzoso en Colombia son alarmantes. Se estima que en Colombia han sido desplazadas por la violencia entre 1.874.917 y 3.832.525 personas según los diferentes registros. De este elevado número, dos de cada tres desplazados poseían tierras en el momento de ser desplazados.(Texto extraído y adaptado de "El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/ Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos").

Las denuncias continúan: la organización colombiana Salva la Selva (Rettet den Regenwald) denunció que los líderes comunitarios que se oponen a las plantaciones de palma y los que apoyan a comunidades desplazadas en posesión de títulos legales sobre sus tierras para que regresen a los lugares de donde fueron desplazados, han estado recibiendo amenazas de muerte. Otras personas de la zona han sido atacadas por miembros de fuerzas paramilitares y militares. En septiembre de 2007, dos personas fueron heridas de bala por hombres que se cree que eran miembros de un grupo paramilitar. También continúan las amenazas a las comunidades que ya han regresado a sus tierras.

Desde 2001, se han producido 113 asesinatos, 13 desplazamientos forzosos, y se ha sabido de numerosas amenazas de muerte y ocupaciones ilegales de tierras. El pasado diciembre, el Fiscal General de la Nación elevó un caso en contra de 23 representantes de compañías de palma de aceite, aunque esto no ha llevado a esfuerzos reales por detener la expansión de la palma ni de la ganadería en tierras comunitarias.

El pasado mes de mayo los miembros de la comunidad de Caracolí, territorio colectivo de Curvaradó, Jair Barrera, Jonny Barrera y Devis Salas, y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, Elizabeth Gómez y Luz Marina Arroyabe, fueron detenidos ilegalmente por la policía con acusaciones dirigidas a criminalizarlos, y posteriormente sufrieron malos tratos, torturas y amenazas. Toda la actuación policial estuvo acompañada por beneficiarios del paramilitarismo y la palmicultura (ver https://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255)

Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) anunció nuevas políticas que incrementarán el apoyo gubernamental a la expansión de los agrocombustibles, con la intención de convertir a Colombia en una potencia exportadora de agrocombustibles.

Las violaciones de los derechos humanos en el Chocó y otras partes, y la destrucción acelerada de bosques tropicales y otros sistemas vitales y biodiversos, son el resultado directo de estas políticas del gobierno.

Artículo basado en: "El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos", Fidel Mingorance, Estudio realizado por HREV para la Coordination Belge pour la Colombia, http://www.hrev.org/media/documentos/elflujopalmaes.pdf; "Colombia: agrocombustibles destruyen comunidades y biodiversidad", Salva la Selva, http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255

inicio

- Malasia: barricadas contra empresa de palma aceitera en Sarawak

En Europa y Estados Unidos, el aceite de palma es promocionado como un agrocombustible que supuestamente evitará el aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Obviamente, el modelo que se está implementado no es el de pequeña escala, diversificado, sino el de gran escala. Y esto es, de hecho, una forma de retrasar el cambio, imperiosamente necesario, de los modelos de producción, de consumo y de comercio con uso intensivo de energía. Las plantaciones de palma aceitera para producir agrocombustible sólo sirven para agravar los ya nocivos efectos de las plantaciones de palma para uso industrial.

Mientras tanto, las grandes empresas se quedan con la parte del león, aprovechando el mercado floreciente de un cultivo industrial que cubre vastas extensiones. Los países del Sur son el objetivo, pero el fruto de la palma tiene un sabor amargo para sus comunidades, que reciben menos de las migajas prometidas. Lo siguiente es un ejemplo más de esto.

En 1996, los Iban, propietarios de tierras en Sarawak, aceptaron que en su territorio del distrito de Kanowit se plantara palma aceitera. Así, se estableció una empresa conjunta entre Boustead Plantations (60%), los aldeanos (30%) y la agencia gubernamental Land

Custody and Development Authority, LCDA (10%).

A través de este acuerdo, se prometió a los aldeanos que se construirían calles para conectar las aldeas multifamiliares de la zona y que se les proveería de electricidad y agua corriente. Además, los poseedores consuetudinarios recibirían títulos de propiedad válidos por 60 años.

Sin embargo, se ha informado que si bien la empresa ha estado cosechando frutos desde hace muchos años, los poseedores consuetudinarios de las tierras no han recibido hasta ahora ningún beneficio, exceptuando el magro adelanto inicial que se les pagó en 1997. Hasta ahora no se ha cumplido ninguna de las promesas restantes.

Los nativos no soportaron más el abuso y decidieron tomar medidas para proteger sus intereses. En abril instalaron una barricada en el camino de acceso a la plantación de palma aceitera para que la empresa no pudiera entrar. En un principio esto fue llevado a cabo por sólo tres comunidades, pero más tarde se sumaron otras, hasta llegar a las actuales 20. Según un artículo de Tony Thien, unas 400 personas de 20 poblaciones Iban de la región de Machan impidieron la entrada de la compañía a su plantación de palma aceitera, mientras que en un punto de acceso a Ladang Kelimut, ubicado en la margen derecha del río Rajang, los aldeanos pusieron a su propia gente para evitar que los trabajadores accedieran a la propiedad. En otro camino de acceso instalaron dos barreras. Se espera que muchas otras aldeas se unan a los bloqueos.

Al mismo tiempo, los aldeanos presentaron una denuncia policial en Kanowit, diciendo que la empresa no les había pagado los dividendos correspondientes y avisando que, si no lo hacían pronto, se verían obligados a llevar el caso a la corte y a detener simultáneamente las operaciones de la compañía.

Como es usual en estos casos, el periodista que cubre este tema informa que "no se pudo contactar a la empresa para obtener sus comentarios".

Artículo basado en: "Angry native landowners act against Sarawak oil palm company", Tony Thien, Malaysiakini, http://www.bmf.ch/en/news/?show=103.

<u>inicio</u>

- África Occidental: los ambiciosos planes de Wilmar y Olam International para la expansión del aceite de palma

Un artículo del boletín de junio del WRM subrayaba el papel de Unilever en la amenaza a los Bosques de Pantano de Tanoé, uno de los últimos bloques boscosos de Costa de Marfil. Como consecuencia de las protestas internacionales, Unilever "promete" ahora una Evaluación de Impacto Ambiental, pero no ha dado garantías de que el bosque vaya a ser protegido. En cambio, ha dado publicidad a los planes que tiene desde hace tiempo de vender acciones que posee en PALM-CI, concesionaria de Tanoé, si bien continuará siendo uno de los principales clientes de dicha empresa. Detrás del anuncio, y posiblemente detrás de los planes para destruir los bosques de Tanoé, hay cambios de mucho alcance en la industria del aceite de palma de la región.

En noviembre de 2007, las empresas Wilmar International y Olam International, con sede en Singapur, anunciaron sus planes para una expansión agresiva en África Occidental. Formaron una empresa conjunta, con participación igualitaria, llamada Nauvu, la cual adquirió acciones en Palm-CI, en la firma SIFCA (agroindustria de África Occidental e inversor importante en Palm-CI), y en un nuevo negocio de refinería establecido por SIFCA y Unilever. (1) El gobierno de Costa de Marfil vendió sus acciones a SIFCA. Desde que Wilmar International compró el Grupo Kuok el año pasado, transformándose en el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, han considerado expandirse hacia nuevas regiones, en especial África Occidental. Sus planes son ambiciosos: Palm-CI, principal productora de aceite de palma y propietaria de la mayor planta de procesamiento de Costa de Marfil, planea aumentar su producción en más de un 200% para el 2020. Wilmar, Olam y SIFCA buscan expandir la producción de aceite de palma, azúcar y caucho, no solo en Costa de Marfil sino en toda la región, incluyendo Guinea, Liberia y Nigeria (el mayor productor de aceite de palma de África). En Costa de Marfil ya hubo un primer ensayo de producción de biodiesel a partir del aceite de palma. (2)

La nueva sociedad Wilmar-Olam y su inversión en África Occidental son noticias preocupantes: ambas empresas han estado

implicadas en la deforestación y en el menosprecio de los derechos de las comunidades. Las concesiones de Wilmar están en Indonesia, donde la expansión del aceite de palma ha estado muy vinculada a la deforestación. Las empresas talan habitualmente una zona de bosques varias veces mayor que la que de hecho plantan con palmas aceiteras, y obtienen ganancias extra de la venta, a menudo ilegal, de la madera obtenida.

Un informe de 2007 realizado por Amigos de la Tierra Países Bajos, Kontak Rakyat Borneo y Lembaga Gemawan (3) expuso la participación de Wilmar en la destrucción de la selva tropical y en los incendios forestales del distrito de Sambas, Kalimantán, y su desconocimiento de las leyes nacionales y los derechos de las comunidades. El informe de Greenpeace "Cooking the Climate" (4) revela una gran cantidad de concesiones de Wilmar sobre tierras de la selva tropical así como un gran número de focos de incendio durante la estación seca. Unilever participa como cliente más que como empresa de plantación, tal como intenta hacer ahora en África Occidental. Olam, por otro lado, obtuvo una concesión maderera en la República Democrática del Congo violando una moratoria, y algunos de sus embarques de troncos ilegales fueron confiscados.(5)

Tanto Unilever como Wilmar son miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO). Unilever es además miembro fundador y ocupa la presidencia de la Junta Directiva de la RSPO. No existe evidencia de que su participación en la RSPO haya tenido otro fin que las relaciones públicas.

La trayectoria de Wilmar en Uganda, único país africano donde la empresa mantiene hasta hoy sus concesiones de palma aceitera, siguió el "modelo" indonesio: su subsidiaria, Bidco, obtuvo permisos para destruir los bosques con el fin de producir aceite de palma, incluso en las islas Ssese (ver boletín del WRM de agosto de 2006).

El Bosque de Pantano de Tanoé bien podría ser el primero de muchos bosques de África Occidental que esta nueva sociedad comercial tiene en la mira.

Por Almuth Ernsting, Biofuelwatch, http://www.biofuelwatch.org.uk, correo electrónico: almuthbernstinguk@yahoo.co.uk

Referencias:

- 1) www.wilmar-international.com/news/press_releases/News_Release_15Nov07.pdf
- 2) www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN30038sifcaseuqit0
- 3) www.foei.org/en/publications/pdfs/Wilmar Palm Oil Environmental Social Impact.pdf/view?searchterm=Wilmar
- 4) www.greenpeace.org/international/press/reports/cooking-the-climate-full
- 5) www.greanpeace.org/international/news/worl-bank-congo-forest 300807

<u>inicio</u>

JUSTICIA CLIMÁTICA YA!

- Grupos de la sociedad civil de Asia reclaman "Justicia Climática"

Más de 170 activistas reunidos en Bangkok durante el fin de semana criticaron duramente a los gobiernos y las empresas por su fracaso a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reclamaron "justicia climática" y "un cambio fundamental en el orden mundial actual" para resolver la crisis climática. Entre los participantes de la conferencia se encontraban pescadores y agricultores, pueblos de los bosques e indígenas, mujeres, jóvenes, trabajadores y activistas no gubernamentales de 31 países.

En un documento de la conferencia, los participantes afirmaron que "lo que entendemos por justicia climática es que la carga de la adaptación a la crisis climática debe correr por cuenta de quienes la generaron, y no por quienes han sido los menos responsables de que ocurra."

La conferencia hizo notar que la voz de los movimientos sociales y los grupos de la sociedad civil de Asia a propósito del cambio climático se hace oír cada vez con mayor fuerza.

Durante los tres días que duró la conferencia, los participantes expresaron reiteradamente su frustración por la forma en que los gobiernos y las empresas, que hasta ahora han llevado la voz cantante en las discusiones sobre el clima, han evitado ocuparse de las causas primarias del cambio climático que amenaza nuestro planeta.

Luego de más de 30 talleres y debates del plenario, los participantes alcanzaron un consenso en cuanto a su oposición al comercio de carbono y a los sistemas de "compensación" como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación en los Países en Desarrollo (REDD), que permiten a los contaminadores pagar para evitar la obligación de reducir sus emisiones.

Los participantes también rechazaron los agrocombustibles industrializados, las mega-represas y la energía nuclear, por considerarlas "falsas soluciones" que "simplemente agravarán la crisis climática y acentuarán la injusticia mundial."

Los participantes insistieron en que una solución posible es que los gobiernos enfrenten el problema del consumo excesivo, tanto en los países desarrollados como entre las élites de los países más pobres.

Se dijo en la conferencia que, mientras los países industrializados son responsables de alrededor del 90% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, el 99% de los riesgos que implica el cambio climático son asumidos por los habitantes de los países en desarrollo.

Los participantes concluyeron que "Lidiar con la crisis climática implica, inevitablemente, realizar un cambio fundamental en el orden mundial actual y una transformación completa de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a escala local, nacional y mundial."

La conferencia fue organizada por Focus on the Global South, un grupo de investigación política y de defensa de los derechos con sede en la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok, junto con otros 24 co-organizadores del mundo entero. La mayoría de los participantes provenía de países asiáticos, pero también hubo representantes de América del Norte, Europa, América Latina y África.

Por más información sobre la conferencia sírvase visitar: www.focusweb.org/climatechange.

inicio

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués Editor: Ricardo Carrere

Movimiento Mundial por los Bosques Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985 wrm@wrm.org.uy http://www.wrm.org.uy

